

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la comunicación, por parte de las Administraciones Públicas a la entidad privada consultante, de los datos relativos a acuerdos de gestión sostenible de fincas, con la finalidad de llevar a cabo un inventario de iniciativas de este tipo. Entre los datos a facilitar se encuentran los relativos a la localización de las fincas.

La primera cuestión a examinar en el presente supuesto, es si la información que se pretende recabar se encuentra sometida a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999.

Con carácter general, debe indicarse que los artículos 1 y 2 de la citada Ley Orgánica extienden su protección a los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter personal, siendo definidos éstos en el artículo 3.a) de dicha Ley como *“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

Debe así señalarse, en primer término, que, como ésta Agencia ha venido reiterando en sus informes, la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999 no es aplicable a las personas jurídicas. Esta interpretación se plasma expresamente en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que en su artículo 2.2 establece que *“Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas,(...)”*. Por consiguiente, solamente estará sujeta a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 la comunicación de datos relativos a fincas pertenecientes a personas físicas.

Para determinar si los datos relativos a una finca constituyen un dato de carácter personal debe tomarse en consideración que el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, contiene una definición amplia del concepto de datos personales al referirse a *“cualquier información”*, precisando el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que constituye un dato de carácter personal *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

Por otra parte, para concretar el significado del término identificable, es preciso acudir a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que en su artículo 2 declara que *“será identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”*. Por su parte, las distintas recomendaciones del Consejo de Europa vinculan el concepto de persona identificable al esfuerzo necesario para lograr la identificación, de forma que no será identificable la persona cuya determinación exija *“plazos o actividades desproporcionadas”*. Este ha sido también el razonamiento seguido por los tribunales que han venido considerando que una persona física era identificable cuando razonablemente y sin grandes esfuerzos era posible asociar los datos proporcionados a una determinada persona.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el artículo 5.1, letra o) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define a una persona identificable como *“toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.”*

Siguiendo estos criterios, los datos relativos a la localización geográfica, e incluso el nombre, de una finca implicarían el tratamiento de datos de carácter personal, en cuanto que dicho dato permite la identificación del titular de la misma sin que ello implique un esfuerzo desproporcionado, al existir mecanismos, tales como la consulta de determinados ficheros de titularidad pública y, en particular, del registro de la Propiedad que permitirían la citada identificación.

Sentado que los datos relativos a fincas cuya titularidad corresponda a una persona física constituyen datos personales, cuyo tratamiento y cesión se encuentran, por consiguiente, sometidos a la normativa de protección de datos, la comunicación de dichos datos constituye una cesión de datos personales, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como *“Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”*.

Dicha cesión deberá sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la misma Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el previo consentimiento del interesado (artículo 11.1), otorgado con carácter previo a la cesión y

suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

La comunicación de datos personales sólo podrá efectuarse sin consentimiento de los interesados en aquellos supuestos previstos en el número segundo del artículo 11, de los cuales, a los efectos que aquí interesan cabe mencionar el previsto en la letra a) "Cuando la cesión está autorizada en una ley."

Debe así analizarse si la cesión de los datos por parte de las Administraciones Públicas podría venir amparada en lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuyo artículo 3.1.a dispone que *"Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil:*

1. *En relación con el acceso a la información: a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede."*

En cuanto a que debe entenderse por información ambiental, el artículo 2 de la citada Ley 27/2006 define ésta como *"Toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:*

- a. *El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.*
- b. *Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a.*
- c. *Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de*

- medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.*
- d. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.*
 - e. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y*
 - f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c.*

No obstante, no cabe entender que la Ley 27/2006, establezca una posibilidad de cesión de datos ilimitada, el artículo 13 de la misma Ley establece un conjunto de excepciones a la obligación de facilitar información ambiental, disponiendo que *“Las solicitudes de información ambiental podrán denegarse si la revelación de la información solicitada puede afectar negativamente a cualquiera de los extremos que se enumeran a continuación: (...)*

f). Al carácter confidencial de los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siempre y cuando la persona interesada a quien conciernen no haya consentido en su tratamiento o revelación”

Por consiguiente, la propia Ley 27/2006, excepciona de su ámbito de aplicación, que quedará sometida al régimen jurídico de la Ley Orgánica 15/1999, la comunicación de información ambiental que pueda dar lugar a la comunicación de datos personales, de manera que no cabe amparar en dicha norma la cesión de datos a que se refiere la consulta. De esta manera, dicha cesión solamente será conforme con lo previsto en la citada Ley Orgánica 15/1999 cuando el titular o titulares de la fincas, en las cuales se lleven a cabo iniciativas de gestión sostenible respecto de las que se pretende llevar un inventario, presten su consentimiento a la cesión de datos, en los términos del artículo 11.1 de dicha Ley antes señalados.